

EL MUNDO

Jueves, 12 de agosto de 2004. Año XV. Número: 5.360.

OPINION

TRIBUNA LIBRE

¿Crisis petrolera y crisis económica?

ROBERTO CENTENO

El pasado 3 de agosto, el ministro indonesio de Petróleo y actual presidente de la OPEP, después de afirmar que el precio del petróleo era «alocado» tuvo el desliz de reconocer que «no existe ya capacidad de producción adicional», justo lo que necesitaban los hedge fund en los mercados de opciones y futuros, mucho más importantes que el mercado físico, para dar rienda suelta a su festival alcista. Para comprender estas reacciones y, sobre todo, lo que puede depararnos el futuro, hay que diferenciar con claridad lo que son hechos esenciales de lo que sólo son expectativas o situaciones coyunturales.

El hecho central es claro: el fuerte crecimiento de las economías asiáticas, China en particular, y de la norteamericana, que ha elevado la demanda de crudo y productos por encima de todas las previsiones, dejando al sistema productivo con el menor margen de reserva de los últimos 30 años. A partir de ahí, cualquier incidente asumible en otras circunstancias provoca una espiral alcista, no porque falte producto físico, sino porque los mercados de opciones apuestan por futuras subidas. De hecho, las recientes alzas están producidas por meras probabilidades, no por realidades: la posibilidad de una interrupción de suministros por parte de la segunda petrolera rusa Yukos, la posibilidad de problemas en Venezuela y Nigeria, y cómo no, la omnipresente amenaza terrorista, no tanto en Irak, cuyo nivel de producción es hoy superior al de la preguerra -los oleoductos se reparan en cuestión de días-, como en el corazón de la infraestructura petrolera saudí. Y la pregunta es: si la mera posibilidad produce estos incrementos, ¿qué pasaría si uno de ellos se convierte en realidad?

En términos cuantitativos la situación podría resumirse así: si las expectativas de interrupciones de suministros no se materializan, el crudo difícilmente podrá mantenerse por encima de 40 dólares/barril; la media probable estaría en torno a los 35. Pero si alguna de las expectativas se materializara, el crudo superaría probablemente la barrera de los 50 dólares, dependiendo el nivel a alcanzar de

la interrupción concreta y de la duración de la misma. Los peores escenarios serían, sin duda, o un atentado terrorista grave a la infraestructura petrolera saudí (por ejemplo, contra un terminal de carga o una planta separadora de gas), o una nueva huelga en la industria petrolera venezolana.

Esto significa pura y simplemente que, en tanto en cuanto la capacidad productiva no se incremente en Arabia Saudí, en Rusia y en otros lugares, la economía mundial vivirá pendiente de un hilo, y estamos a uno o dos años de que tal cosa ocurra. Evidentemente, una normalización de la situación en Irak contribuiría a frenar el elemento especulativo, que hoy es el factor alcista esencial. Más a largo plazo, la situación es incierta, ya que el crecimiento de las economías asiáticas parece imparable, y la mejora del nivel de vida de cientos de millones de personas exigirá más energía, lo que puede hacer declinar el ratio reservas-producción, que hoy se sitúa en 46 años para el petróleo y 65 años para el gas natural, mucho más rápidamente si ambas tienen que soportar el grueso del esfuerzo.

Respecto al impacto sobre las economías, lo primero que debe señalarse es que aún estamos lejos en términos reales de los niveles de precios alcanzados en la segunda crisis del petróleo, ya que para ello el crudo tendría que situarse a niveles algo superiores a los 70 dólares/barril, pero ya en los niveles actuales el impacto es mayor de lo que habitualmente se menciona. La reducción de 0,5 puntos en el crecimiento del PIB por cada 10 dólares de subida es sólo el impacto directo, y además tampoco es lineal; es decir, un incremento de otros 10 dólares reduciría el crecimiento mucho más. Pero además del impacto directo hay otros efectos indirectos. En el caso de la inflación, y para la economía española, el impacto inflacionista indirecto vía relaciones intersectoriales, que aparecería al cabo de unos nueve meses, sería el doble del directo. En el caso del consumo, aparte del efecto deflactor directo por el trasvase de PIB de los países consumidores a los países productores, el efecto riqueza producido por la caída de las Bolsas de valores. Y, en el de la economía norteamericana, por cada dólar perdido en Bolsa el consumo privado se reduce en 15 centavos, aunque esto varía para cada país en función del porcentaje de familias que poseen renta variable.

¿Y qué ocurre con España? Para comprenderlo debemos entender de nuevo los hechos esenciales y separarlos de los accesorios, y el hecho esencial en nuestro caso es que somos mucho más vulnerables a estas crisis que nuestro entorno, tanto en términos económicos como en términos de seguridad de suministro. Las razones son claras. En primer lugar, la diferencia central en nuestro caso es que dependemos de las energías importadas, petróleo y gas natural fundamentalmente, en un 80%, frente a un 50% la media de la UE. La segunda, que en el caso del gas natural somos extraordinariamente vulnerables

al depender nuestros suministros en un 60% de una sola fuente, lo que no sucede en ningún otro país desarrollado. La tercera, que se está implantando un sistema de producción eléctrica -que es la energía final con mayor tasa de crecimiento- extremadamente caro y vulnerable, lo que agravará aún más la falta de productividad de nuestra economía. Adicionalmente, no existe competencia efectiva en ninguno de los subsectores energéticos, donde las estructuras oligopolistas se han consolidado firmemente.

La política de Aznar, brillante en tantas áreas, ha sido muy desafortunada en materia energética. Apostando por la consolidación de grandes empresas capaces de actuar en los mercados internacionales, ha consolidado los monopolios y relegado la competencia. Las distintas disposiciones liberalizadoras y las actuaciones de los órganos de competencia y regulación de mercados han sido y siguen siendo una auténtica burla a los ciudadanos. Permitiendo al sector eléctrico, durante más de siete años, realizar la casi totalidad de sus inversiones en internacionalización y diversificación, ha dejado al sistema de producción y distribución en España en una situación de precariedad extrema. Cediendo a la demagogia medioambiental, que por una vez coincidía con los deseos de los oligopolistas, se está desarrollando un sistema de producción que duplica el costo de la energía generada, y que no mejora sino que empeora tanto los riesgos para el entorno como para el medio ambiente.

Por ello, lo que urgentemente se necesita es una planificación energética integral, que frene primero y reduzca después nuestra creciente dependencia del petróleo y del gas, y que sitúe nuestros costes energéticos a niveles asumibles, en línea con los de nuestros principales competidores. La planificación eléctrica y gasista actualmente en marcha, el plan más disparatado del que se tiene memoria, incrementa la dependencia energética, apuesta por las energías más caras del mercado, no desarrolla suficientemente las infraestructuras eléctrica y gasista y, lo realmente increíble, no tiene ni el más mínimo cálculo económico ni de sensibilidad alguna a las variaciones de precios. Adicionalmente, el Gobierno debe pedir a la UE una moratoria en el cumplimiento del Protocolo de Kioto, hasta que los grandes países industriales acepten su cumplimiento; lo contrario, además de inútil, sería un suicidio para España.

De todas formas, la gran opción sobre la que tiene que pronunciarse el Gobierno es muy clara: la energía nuclear. En países como Francia, Japón o España, donde el grado de dependencia energética es esencial, el empleo de la energía nuclear no es una alternativa; es una necesidad imperiosa, la única salida posible. Una central nuclear moderna produce electricidad a un coste del orden de 25 euros/Mwh, incluyendo el tratamiento y almacenamiento de

residuos. Un ciclo combinado de gas produce electricidad a 60 euros/Mwh con el crudo a 35 dólares/barril, o a 66 euros/Mwh con el crudo a 40 dólares, y las energías renovables, aparte de no poder aportar más que cantidades de energía ínfimas y no modulables, entre 66 y 120 euros/Mwh. Los almacenes de gas líquido y los metaneros suponen además un riesgo muy superior para el entorno al de una central nuclear, en caso de accidente o atentado terrorista, y el efecto invernadero creado por las centrales de gas es superior a las de carbón, ya que, aunque emiten la tercera parte de CO₂, el metano perdido en las operaciones, que es una cifra significativa, crea casi 30 veces más efecto invernadero que el CO₂ y además no se destruye.

La gran opción que tiene el Gobierno, que además de mejorar sustancialmente nuestro grado de autoabastecimiento serviría para reducir los precios y para introducir competencia real en el mercado eléctrico, e indirectamente en el gasista, sería la aplicación del modelo finlandés, promoviendo la construcción de una o más centrales nucleares por asociaciones de grandes consumidores, o incluso por comunidades autónomas, y donde la obtención de financiación no sería problema a través de un sistema de project financing, pues el consumo estaría garantizado. En el resto de sectores, y en tanto en cuanto no exista competencia real, el Gobierno debería volver a un sistema de precios máximos, por ejemplo la media de la UE-25, hasta que ninguna empresa tenga más de un 30% de cuota de mercado, que es el límite máximo para que la competencia sea posible; aparte de perseguir de verdad los pactos colusorios, como los denunciados por la Fiscalía Anticorrupción, y hoy durmiendo el sueño de los justos en el Juzgado número 1 de la Audiencia Nacional.

Roberto Centeno es catedrático de Economía de la Escuela de Minas de la UPM.

© Mundinteractivos, S.A.